



Asamblea General

Distr. general
29 de abril de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

43^{er} período de sesiones

24 de febrero a 20 de marzo de 2020

Tema 4 de la agenda

Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo

Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar* **

Resumen

Este informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar se presenta de conformidad con la resolución 40/29 del Consejo de Derechos Humanos. En el informe, la Relatora Especial reflexiona sobre su mandato, señala las novedades en materia de derechos humanos y formula recomendaciones para que se hagan efectivos los derechos humanos en Myanmar.

* Este informe se presenta con retraso para poder incluir en él la información más reciente.

** Los anexos del presente informe se distribuyen tal como se recibieron, únicamente en el idioma en que se presentaron.



I. Introducción

1. Este informe, presentado de conformidad con la resolución 40/29 del Consejo de Derechos Humanos, se refiere a las novedades ocurridas en Myanmar desde que la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Yanghee Lee, presentó su informe anterior al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2019 (A/HRC/40/68), sus actualizaciones orales al Consejo en junio y septiembre de 2019, y un informe a la Asamblea General en septiembre de 2019 (A/74/342). Se trata de su último informe antes de finalizar su mandato.

2. A pesar de que el Gobierno de Myanmar dejó de cooperar con la Relatora Especial, ella sigue tratando de colaborar con el Gobierno para abordar las cuestiones de derechos humanos en el país. La Relatora Especial solicitó visitar Myanmar en enero de 2020, pero la solicitud fue denegada (véase el anexo I). No obstante, sin dejar de buscar de oportunidades para dialogar, el 4 de febrero de 2020 la Relatora Especial envió una lista de cuestiones al Gobierno que aún no ha recibido respuesta (véase el anexo II).

3. La Relatora Especial realizó visitas a Tailandia, del 15 al 17 de enero, y a Bangladesh, del 17 al 23 de enero de 2020. La Relatora Especial agradece a los Gobiernos de ambos países que facilitaran las visitas. En Tailandia, se reunió con entidades de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre cuestiones de derechos humanos en Myanmar. En Bangladesh, se reunió con funcionarios del Gobierno y representantes de las Naciones Unidas en Daca y Bazar de Cox. Visitó los campamentos de refugiados en Bazar de Cox y se entrevistó con refugiados y representantes de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de las actividades de respuesta para los refugiados. Celebró una videoconferencia con el equipo de las Naciones Unidas en Myanmar.

4. La Relatora Especial observa que su mandato ha abarcado momentos importantes de la historia reciente de Myanmar. Recuerda el gran espíritu de optimismo que tenía junto con otras personas cuando asumió su mandato en 2014, en particular respecto de la transición a la democracia. Tuvo acceso al país y mantuvo un diálogo franco con el Gobierno y la sociedad civil, las Naciones Unidas y la comunidad internacional. Viajó mucho durante tres años, visitó Rangún, Nay Pyi Taw, Kachín, Shan, Rakáin, Kayin y Mon, y se reunió con una amplia variedad de interesados, entre ellos víctimas de violaciones de los derechos humanos, comunidades afectadas por proyectos de desarrollo, desplazados internos y personas recluidas en establecimientos penitenciarios.

5. Cuando asumió su mandato en 2014, éste fue ampliado en virtud de la resolución 25/26 del Consejo de Derechos Humanos para incluir los avances en el proceso y la reforma electorales en el período previo a las elecciones de 2015. En marzo de 2016, en su resolución 31/24, el Consejo le pidió además que estableciera puntos de referencia para medir los progresos realizados y definir esferas prioritarias de asistencia técnica y fomento de la capacidad. La Relatora Especial preparó un proyecto de puntos de referencia conjuntos, basado en recomendaciones anteriores que había presentado al Gobierno, y propuso un calendario de aplicación. Había tenido contactos con el Gobierno sobre algunos de estos puntos de referencia, pero los progresos logrados han sido limitados. Si bien sus reiteradas recomendaciones ofrecen a Myanmar los medios prácticos para proteger, respetar y hacer efectivos los derechos humanos, son pocas las que se han aplicado.

6. Nunca se insistirá lo suficiente en la magnitud y la tragedia de los acontecimientos que tuvieron lugar en Myanmar durante el mandato de la Relatora Especial. Tras los actos de violencia cometidos en norte de Rakáin en octubre de 2016, la Relatora Especial visitó la zona. También visitó Bazar de Cox por primera vez y se reunió con quienes habían huido de las operaciones militares. Después de escuchar la brutalidad que habían sufrido por parte de las fuerzas de seguridad, recomendó que el Consejo de Derechos Humanos estableciera una comisión de investigación sobre lo sucedido en Rakáin, y que celebrara un período extraordinario de sesiones sobre la situación en los estados de Kachín y Shan. El Consejo, en su resolución 34/22, estableció una misión internacional independiente de investigación, con el mandato de determinar los hechos y las circunstancias de las presuntas violaciones

de los derechos humanos cometidas por las fuerzas militares y de seguridad, y de los abusos cometidos en Myanmar. Después de que se perpetraran nuevos actos de violencia extrema en el norte de Rakáin a partir del 25 de agosto de 2017, que la Relatora Especial consideró que llevaban el sello del genocidio, propuso que el Consejo estableciera un mecanismo de rendición de cuentas. El Consejo estableció el Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar en virtud de su resolución 39/2 en septiembre de 2018 y el mecanismo entró en funcionamiento en agosto de 2019. La Relatora Especial también pidió que las Naciones Unidas llevara a cabo una investigación independiente de sus acciones en relación con Rakáin. Gert Rosenthal emprendió ese examen a principios de 2019.

7. Desde septiembre de 2017, el Consejo de Seguridad se reunió varias veces para debatir sobre Myanmar. Visitó Myanmar y Bangladesh en abril de 2018 y emitió una declaración sobre la situación tras esas visitas. Sin embargo, la Relatora Especial está decepcionada porque el Consejo no ha conseguido unirse para aprobar una resolución que demuestre su unanimidad en cuanto a la determinación de abordar la situación. Renueva su llamamiento al Consejo de Seguridad para que remita la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional, o a la comunidad internacional a fin de establecer un tribunal internacional para enjuiciar a los presuntos autores de delitos de derecho internacional cometidos en Myanmar.

II. Situación de los derechos humanos

A. Espacio democrático

8. En 2015 Myanmar celebró una elección democrática histórica y en 2016 el Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia asumió sus funciones. La Relatora Especial esperaba una amplia apertura del espacio democrático bajo el nuevo Gobierno, pero esto no sucedió.

1. Elecciones generales

9. Myanmar se aproxima una vez más a unas elecciones generales. Hay varias cuestiones que es preciso abordar para que las elecciones cumplan las normas internacionales que disponen que han de ser transparentes, inclusivas, participativas, libres e imparciales.

10. En el período previo a las elecciones y durante su celebración se debería hacer un esfuerzo especial para ampliar el espacio a fin de mantener un debate público libre y abierto entre todos los miembros de la comunidad y para recabar, recibir y difundir información. Sin embargo, a pesar de los reiterados llamamientos de la Relatora Especial en favor de una reforma, el marco jurídico que regula los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación sigue siendo incompatible con las normas internacionales y reprime la libertad de expresión. Periodistas, activistas y otras personas siguen enfrentando acusaciones y condenas en virtud de leyes que penalizan la expresión legítima y la actividad democrática. Además, se ha ordenado una suspensión total de los servicios de Internet móviles en nueve municipios de los estados de Rakáin y Chin, en virtud del artículo 77 de la Ley de Telecomunicaciones de 2013, que limita numerosos derechos. Preocupa a la Relatora Especial que esta disposición pueda aplicarse en otras partes del país para restringir la información y el debate público. Es urgente reformar el marco jurídico, en particular determinados artículos de la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Asociaciones Ilícitas de 1908, la Ley de Reunión Pacífica y Manifestación Pacífica de 2016, la Ley de Ciudadanía de 1982 y el Código Penal.

11. Durante las elecciones es fundamental que toda la población pueda ejercer su derecho a participar, a presentarse como candidato y a votar. La Ley de Inscripción de Partidos Políticos de 2010 dispone que solo los ciudadanos de pleno derecho pueden formar partidos políticos y solo esos ciudadanos y los ciudadanos naturalizados pueden ser miembros de un partido político. Debido al carácter discriminatorio de la Ley de Ciudadanía y a su aplicación arbitraria, la Ley de Inscripción de Partidos Políticos limita los derechos de los miembros de las minorías religiosas y étnicas, que se enfrentan a

obstáculos innecesarios para obtener la documentación que acredita su ciudadanía, especialmente los musulmanes. Estas leyes limitan en particular el derecho a la libertad de asociación y participación política de los rohinyás.

12. La mayoría de los rohinyás fueron privados del derecho de voto antes de las elecciones de 2015, y los que todavía permanecen en Myanmar antes de las elecciones de 2020 siguen en general en la misma situación. Hay más de 1 millón de refugiados de Myanmar fuera de sus fronteras que no pueden participar en las elecciones. La Relatora Especial también ha sido informada en múltiples ocasiones sobre las preocupaciones de los interesados que desean saber si la votación tendrá lugar en las zonas afectadas por el conflicto, en particular en Rakáin y en el sur del estado de Chin, y en el norte de Shan, ya que ello afectaría de forma desproporcionada la representación de las minorías étnicas y religiosas. El Gobierno no debe seguir negando los derechos políticos a amplios segmentos de su población: debe reformar el marco jurídico para garantizar el derecho de todos a votar y a presentar una candidatura, y asegurar que se celebren elecciones en todo el país. Si surgen preocupaciones por la seguridad en una zona determinada, el Gobierno debe estudiar alternativas al voto presencial para garantizar que todos los electores puedan emitir su voto. Durante las elecciones, la votación debe estar abierta a observadores y medios de comunicación locales e internacionales independientes para garantizar que los comicios se lleven a cabo de forma libre, creíble, equitativa y pacífica.

2. Discurso de odio, nacionalismo y populismo

13. La Relatora Especial ha planteado en repetidas ocasiones la cuestión del discurso equiparable a la incitación a la violencia, la discriminación y el odio en Myanmar, que sigue siendo una preocupación generalizada y grave, en particular en los medios de comunicación social. El Gobierno tiene la obligación de condenar ese discurso; sin embargo, no lo ha hecho. La Relatora Especial sigue recibiendo informaciones según las cuales las opiniones legítimas expresadas en Facebook se moderan en exceso mediante el uso de prohibiciones generales y retiradas automáticas, mientras que, al mismo tiempo, el control de los mensajes en línea de incitación a la violencia, la discriminación y el odio sigue siendo insuficiente. La Relatora Especial ha recibido información que indica que el Ministerio del Interior está dando prioridad a un proyecto de ley contra las expresiones de odio con miras a su aprobación. Sigue preocupada por el hecho de que la ley pueda utilizarse para restringir aún más la libertad de expresión recurriendo a la censura y a las sanciones penales como medio de combatir la incitación al odio en sentido amplio. Este enfoque es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos. En cambio, la Relatora Especial reitera su llamamiento al Gobierno para que adopte medidas de amplio alcance, incluida la aprobación de una ley contra la discriminación, de conformidad con el Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.

14. El aumento de los discursos nacionalistas, extremistas y populistas, que son contrarios a los derechos humanos, también es preocupante, en particular en relación con las minorías étnicas y religiosas, ya que alimentan la incitación a la violencia, la discriminación y el odio contra esos grupos. Esos discursos demonizan a la sociedad civil y a los activistas de derechos humanos y los inducen a la autocensura. El Gobierno tiene la responsabilidad de oponerse públicamente a esos discursos y de promover en su lugar el pluralismo, la tolerancia y la inclusión. La Relatora Especial señala el papel de los medios de comunicación y los medios sociales en esta esfera, que debe aprovecharse para promover las normas positivas, la diversidad y la apertura.

3. Detenciones y procesamientos por motivos políticos

15. En enero de 2020, según informaciones, había 647 presos políticos en Myanmar, de los cuales 73 cumplían penas de prisión, 141 estaban reclusos en espera de juicio y 433 se encontraban en prisión preventiva. Entre la fecha en que el Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia asumió sus funciones y noviembre de 2019 oficiales militares habría iniciado al parecer 47 procesos por difamación con arreglo a diversas leyes contra 96 personas, entre ellas, activistas, periodistas, dirigentes religiosos, artistas y miembros de partidos políticos. Durante el mismo período, algunos miembros del Parlamento y sus

asociados presentaron denuncias contra 37 personas por difamación de parlamentarios. Entre marzo de 2016 y noviembre de 2019, algunos miembros del Parlamento y sus representantes iniciaron 22 acciones judiciales contra 30 personas que presuntamente los criticaban por el desempeño de sus funciones. Estos procesamientos por motivos políticos deben cesar.

16. En noviembre de 2019, seis jóvenes karenes fueron condenados a seis meses de prisión con trabajos forzados por el Tribunal Municipal de Loikaw, estado de Kayah, en virtud del artículo 8 d) de la Ley de Protección de la Privacidad y la Seguridad de los Ciudadanos de 2017. Se oponían a la construcción de una estatua del General Aung San y presuntamente emitieron una declaración en la que se afirmaba que el Ministro Principal del estado de Kayah y el Ministro de Planificación y Finanzas eran delincuentes políticos y enemigos de la unidad étnica. A la Relatora Especial le preocupa que se trate de una violación de múltiples derechos; pide la liberación de estas personas y que cesen las detenciones de manifestantes pacíficos.

17. Se ha informado a la Relatora Especial de que Ohn Hla, una defensora karén de los derechos ambientales y territoriales, fue condenada de nuevo a un mes de cárcel, junto con otras tres personas, en virtud del artículo 19 de la Ley de Reunión Pacífica y Manifestación Pacífica. Ohn Hla fue detenida en abril de 2019 tras unirse a los residentes del complejo de viviendas Shwe Mya Sandi para protestar por la pérdida de sus tierras. Fue detenida porque su nombre no figuraba en la solicitud presentada para llevar a cabo la protesta. Los requisitos excesivamente onerosos de la Ley deben ser revocados, las acusaciones retiradas y Ohn Hla liberada.

18. Han proseguido los procesamientos injustos de miembros de la compañía Peacock Generation Thangyat —Kay Khine Tun, Zayar Lwin, Paing Phyto Min, Paing Ye Thu, Zaw Lin Htut, Su Yadanar Myint y Nyein Chan Soe— por sus actuaciones de abril de 2019 en las que satirizaban al ejército de Myanmar, también conocido como el Tatmadaw, y que se distribuyeron en línea. En febrero, tres miembros de la compañía fueron condenados por difamación por el Tribunal Municipal de Botahtaung en virtud del artículo 66 d) de la Ley de Telecomunicaciones. Cuatro miembros ya habían sido condenados a seis meses de cárcel por difamación en virtud de ese artículo por el Tribunal Municipal de Mayangon. Además de las acusaciones de difamación, en noviembre de 2019 seis miembros de la compañía fueron condenados a un año de prisión en virtud del artículo 505 a) del Código Penal por el Tribunal Municipal de Botahtaung; cinco ya habían sido condenados por las mismas acusaciones en octubre de 2019 por otro tribunal de Mayangon y cumplirán como mínimo dos años de prisión. Zayar Lwin, Paing Ye Thu y Paing Phyto Min siguen afrontando acusaciones en virtud del artículo 505 a) en otros cuatro tribunales municipales de la región de Ayerwaddy. La Relatora Especial pide que sean puestos en libertad inmediatamente y que se retiren las acusaciones. La sátira no es un delito. También señala que va en contra de los principios del estado de derecho que las personas deban afrontar múltiples acusaciones ante diferentes tribunales municipales en relación con el mismo hecho; su derecho a un juicio imparcial debe ser respetado.

19. Los periodistas Swe Win, Ye Ni, Aung Marm Oo y Ye Kyi Myint siguen afrontando acusaciones en virtud de la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Asociaciones Ilícitas y el Código Penal, respectivamente. En octubre de 2019, los militares presentaron denuncias por difamación en virtud del artículo 505 a) del Código Penal contra el abogado Kyi Myint, el ex capitán del ejército de Myanmar Nay Myo Zin y el poeta Saw Wai por las observaciones que hicieron en una reunión pública celebrada en abril en el municipio de Kawthaung, región de Tanintharyi, en apoyo de la modificación de la Constitución. La Relatora Especial pide que se retiren las acusaciones contra estas personas.

B. Derechos sobre la tierra, empresas y derechos humanos

20. Durante el mandato de la Relatora Especial se han producido cambios sustanciales en el entorno empresarial de Myanmar. Las principales características han sido la liberalización económica y el levantamiento de las sanciones económicas, que han abierto oportunidades para la inversión y el desarrollo. Sin duda, esto ha generado beneficios para

muchas personas, pero también ha agravado los problemas de derechos humanos existentes. El Gobierno tiene la obligación de proteger a todas las personas que se encuentran en su territorio contra la conculcación de los derechos humanos, incluso por parte de empresas comerciales. En la actualidad, el marco jurídico que regula las actividades comerciales en Myanmar no permite cumplir esta obligación, mientras que la realidad sobre el terreno aumenta la complejidad de la situación y el riesgo de que las empresas vulneren los derechos humanos.

21. La Relatora Especial también ha observado las graves consecuencias de proyectos de desarrollo e industrias en gran escala en todo el país. En muchos casos, esto tiene lugar sin consulta previa con las comunidades afectadas y conlleva la pérdida de tierras, la destrucción del medio ambiente, desplazamientos forzados y la intimidación, la represión e incluso la violencia contra los opositores. Recuerda haber visitado las plantaciones de plátanos en Kachín, que se extienden a lo largo de kilómetros en antiguas tierras comunales y contaminan los ríos con plaguicidas. Ha habido protestas y oposición pública por las presas de los ríos Mytisone y Thanlwin, las zonas económicas especiales de Thilawa y Kyaukphyu, la mina de cobre de Letpadaung, el casino Swe Ko, la central eléctrica de Tigiyt, la fábrica de cemento Alfa, y los oleoductos y gasoductos que atraviesan Myanmar. La falta de transparencia que rodea a estos y muchos otros proyectos importantes erosiona la confianza del público en el Gobierno, y la población estima que tiene pocas posibilidades de obtener algún beneficio de estos proyectos. Esta convicción está particularmente arraigada en los estados étnicos. Hasta la fecha, el Gobierno todavía no ha aplicado un enfoque del desarrollo transparente, integrador y que respete los derechos; su aplicación sigue siendo una prioridad vital.

1. Derechos sobre la tierra

22. Durante todo el mandato de la Relatora Especial, la cuestión de los derechos sobre la tierra ha seguido revistiendo suma importancia para Myanmar. Todavía no se han resuelto antiguas controversias sobre casos de expropiación de tierras, que se han visto agravadas por la reciente evolución del marco jurídico, mientras se siguen señalando nuevos casos de presunta confiscación de tierras. Los derechos de tenencia de la tierra se abordaron en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial de 2016, en la que se recomendó que se aprobara de una ley nacional sobre la tierra de conformidad con la Política. El Gobierno aún no ha puesto en práctica esta recomendación.

23. La Ley de Adquisición, Reasentamiento y Rehabilitación de Tierras de 2019 aumenta la inseguridad sobre la tenencia de la tierra. La Ley no refleja la compleja realidad respecto del uso de la tierra y los desplazamientos en Myanmar y contiene disposiciones demasiado amplias sobre los “finés públicos” para los que el Gobierno puede adquirir tierras. No queda claro que la Ley sea compatible con los procedimientos de expropiación de tierras previstos en el Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental establecido en 2015, y no cumple las normas internacionales, incluida la prohibición de los desalojos forzados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

24. La ausencia de una protección jurídica adecuada de los derechos de uso consuetudinario y comunal de la tierra puede ser explotada por las empresas, el ejército y otros interesados, y dar lugar a violaciones y abusos de los derechos humanos. Según informaciones facilitadas a la Relatora Especial, en 2017 y 2018, la empresa Orchard Company presentó denuncias contra 29 agricultores del municipio de Maubin, región de Ayeyarwady, en virtud de la Ley de Ordenación de Tierras Desocupadas, en Barbecho y sin Explotar, de 2012. Los agricultores habían estado cultivando tierras de las que al parecer la empresa se había apropiado desde 1991. En abril de 2019, la empresa presentó otra denuncia contra la aldeana Sein Soe en virtud del artículo 8 f) de la Ley de Protección de la Privacidad y la Seguridad de los Ciudadanos, después de que expusiera la cuestión de los casos de esos agricultores durante una visita del Consejero de Estado. En septiembre de 2019, 11 de los agricultores fueron condenados a prisión en virtud de la Ley de Ordenación de Tierras Desocupadas, en Barbecho y sin Explotar. La Relatora Especial pide que se les ponga en libertad de inmediato y que se les devuelvan sus tierras o se les proporcione una indemnización adecuada.

25. En 2019, los militares presentaron denuncias por daños, en virtud del artículo 6, párrafo 1, de la Ley de Protección de los Bienes Públicos de 1947, contra 21 agricultores que cultivaban sus tierras en el municipio de Demoso, estado de Kayah. Doce de los agricultores también se enfrentan a nuevas acusaciones de allanamiento en virtud del artículo 447 del Código Penal, ya que se alega que la tierra fue confiscada por el ejército hace 30 años. En el municipio de Loikaw, también en el estado de Kayah, los militares han presentado múltiples denuncias, con arreglo al Código Penal y a la Ley de Protección de los Bienes Públicos, contra 20 agricultores. El ejército afirma que ha seguido utilizando las tierras confiscadas, a pesar de que varios de los agricultores han obtenido certificados de uso de la tierra en virtud de la Ley de Tierras de Cultivo de 2012. La Relatora Especial pide que se retiren las acusaciones contra estas personas.

26. La Relatora Especial reitera que el Gobierno debe dejar de aplicar una legislación regresiva. Myanmar necesita leyes sobre la tierra para proteger los derechos de la población rural. La Relatora Especial pide al Gobierno que dé prioridad a la formulación de una ley nacional sobre la tierra en consonancia con la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y las normas internacionales mediante un proceso transparente y consultivo. Posteriormente habrá que reformar el marco jurídico más amplio que regula el uso y la apropiación de tierras para incorporar con coherencia y claridad las disposiciones de la ley nacional sobre la tierra relativas a los derechos.

2. Protección de datos

27. Al comienzo del mandato de la Relatora Especial, en 2014, la tasa de penetración de Internet en Myanmar se situaba en torno al 1 % y la de la telefonía móvil en el 5 %. Esas cifras han registrado un marcado aumento desde entonces. El rápido desarrollo del sector de la tecnología de la información y las comunicaciones ha ofrecido muchas oportunidades, pero también ha suscitado importantes preocupaciones en materia de derechos humanos. Una de esas preocupaciones es la ausencia de leyes que regulen la protección y la vigilancia de los datos. La Ley de Telecomunicaciones regula la actuación de las empresas de telecomunicaciones y otorga al Gobierno un control excesivo de los servicios y los datos, sin justificaciones claramente definidas.

28. En 2015 el Gobierno implantó el registro obligatorio de la tarjeta de módulo de identificación de abonado (SIM) para los usuarios de teléfonos móviles. Esto es motivo de gran preocupación ya que no existe un procedimiento claro y completo para regular la interceptación lícita de datos, de conformidad con las normas internacionales, ni de un sistema de justicia independiente y eficaz que la supervise. El registro obligatorio permite rastrear y localizar a las personas registradas sin una justificación proporcionada y necesaria. También puede utilizarse para la vigilancia, la censura, la persecución de opositores políticos y para reprimir la libertad de expresión. Esto plantea graves riesgos para la seguridad, la protección, la privacidad y el ejercicio de otros derechos. Además, se ha alertado a la Relatora Especial sobre los planes del Gobierno de establecer una base de datos nacional para almacenar información biométrica de los usuarios registrados de tarjetas SIM, lo que aumentará considerablemente el riesgo de vigilancia y de infracciones de la seguridad, y supondrá una nueva vulneración de los derechos de la población.

29. A la Relatora Especial le preocupan además los planes del Gobierno de introducir tarjetas de identificación digital como parte de un sistema que incluirá información biométrica. La forma en que se utilizará y almacenará esa información entraña graves riesgos, en particular en ausencia de leyes sobre la protección de datos. Además, esos planes suscitan graves preocupaciones acerca de los derechos y la seguridad de los grupos marginados de Myanmar, en particular aunque no exclusivamente, los rohinyás. La Relatora Especial insta urgentemente al Gobierno a que suspenda esos planes hasta que se haya adoptado el marco jurídico necesario para la protección de los datos mediante un proceso amplio, inclusivo y consultivo. En términos más generales, es necesario implantar el estado de derecho y un sistema judicial independiente, así como reformar la Ley de Ciudadanía, para garantizar que la reunión y el almacenamiento de datos personales sean compatibles con la protección de los derechos humanos. Las empresas que participan en el desarrollo de sistemas de gobernanza digital deben ser conscientes de los riesgos potencialmente graves para los derechos humanos y ejercer de forma más rigurosa la

diligencia debida, lo que debe incluir la denegación de las ventas de sus servicios si se considera que los riesgos son demasiado elevados.

3. Extracción de recursos minerales

30. A lo largo de su mandato, la Relatora Especial ha informado sobre la extracción de recursos naturales en Myanmar en relación con los derechos humanos y las consecuencias en el medio ambiente, la dinámica de los conflictos y las comunidades. La Relatora Especial observa que la reglamentación de la extracción de recursos naturales en las zonas afectadas por el conflicto sigue siendo particularmente problemática y plantea graves problemas de gobernanza. Las partes en los conflictos armados tienen intereses en la extracción de las riquezas naturales del país, lo que se añade a la complejidad de las negociaciones de paz.

31. La Relatora Especial sigue recibiendo informes de atentados contra los derechos humanos en todo el país debido a una explotación minera irresponsable. Los supervivientes de un corrimiento de tierra que tuvo lugar en agosto de 2019 en el municipio de Paung, estado de Mon, en el que al parecer murieron más de 70 personas, afirman que el desastre fue causado por la extracción irresponsable de arena. A pesar de los llamamientos hechos por un parlamentario del estado de Mon en noviembre de 2019, aún no se ha llevado a cabo una investigación sobre este grave incidente. En diciembre de 2019, los agricultores de subsistencia del distrito de Tachileik, en Shan oriental, se vieron obligados a trasladarse debido al impacto ambiental de la extracción de oro en la zona. Las empresas, que al parecer operaban sin autorización vertieron residuos de la minería en los arroyos y ríos cercanos y llegaron a sus arrozales. Los agricultores no han recibido indemnización y su derecho a un nivel de vida adecuado ha resultado sumamente afectado.

32. El marco de gobernanza en Myanmar todavía no respalda la minería responsable. La complejidad y la falta de claridad y coherencia entre las políticas, leyes y reglamentos pertinentes generan incertidumbre jurídica. Además, el Gobierno dispone de recursos y capacidad técnica limitados, en particular en los gobiernos estatales y regionales, para hacer cumplir los reglamentos ambientales y sociales existentes. Las empresas se están aprovechando de esta situación y es preciso que se atengan a las normas internacionales. La Relatora Especial insta al Gobierno a que vele por que la continuación de la reforma del sector de la extracción siga siendo una prioridad en su programa. Pide al Gobierno que dé prioridad a la implementación efectiva del Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental, para convertirlo en un requisito coherente, transparente y aplicable. El derecho a un medio ambiente saludable, que reúne las dimensiones ambientales de los derechos fundamentales que garantizan una vida digna, debe ser protegido del impacto de la extracción de recursos naturales.

33. La Relatora Especial encomia una vez más la continua participación del país en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, que es un medio positivo para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector. Ello contribuirá a una mayor efectividad de los derechos, entre ellos los derechos a la información y al acceso a los recursos. Acoge con agrado las recientes iniciativas del Gobierno para promover la divulgación de información sobre los propietarios efectivos y las “personas políticamente expuestas” en la industria extractiva, a las que la Iniciativa describe como personas que ejercen o han ejercido funciones públicas importantes. La Relatora Especial exhorta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para asegurar que los requisitos de presentación de informes aplicables a las empresas extractivas sean transparentes, coherentes y exigibles, de conformidad con las normas de la Iniciativa.

34. Preocupa a la Relatora Especial la información recibida acerca de un proyecto de ley sobre el petróleo que parece ser deficiente en algunas esferas clave. Según esa información el proyecto de ley no resuelve el conflicto de intereses inherente a la doble función de la empresa de propiedad estatal, Myanma Oil and Gas Enterprise, que es a la vez socio comercial y regulador, lo que es incompatible con los planes de reforma de las empresas estatales en el marco del Plan de Desarrollo Sostenible de Myanmar. El proyecto de ley tampoco incluye disposiciones sobre la divulgación de información conforme las obligaciones que incumben a Myanmar en el marco de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, lo que socavaría gravemente los esfuerzos por mejorar la

transparencia y la rendición de cuentas. Además, no aborda la controvertida cuestión de la distribución de los ingresos, con lo cual se corre el riesgo de aumentar las reclamaciones de los habitantes del estado de Rakáin. En los últimos años Rakáin ha recibido una parte importante de las inversiones extranjeras realizadas en Myanmar, principalmente debido a sus reservas de petróleo y gas mar adentro. Sin embargo, la tasa de pobreza en Rakáin sigue siendo muy superior a la media nacional. Es esencial para la paz que se establezca un sistema eficaz de distribución de los ingresos. Asimismo, la Relatora Especial subraya que, en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Gobierno está obligado a garantizar el ejercicio sin discriminación de los derechos reconocidos por el Pacto. También debería promoverse la igualdad sustantiva mediante políticas económicas, asignaciones presupuestarias y la distribución de recursos.

4. Fábricas de prendas de vestir

35. La Relatora Especial ha recibido informes sobre siete líderes de una huelga y un activista de los derechos laborales que se enfrentan a acusaciones en virtud del artículo 19 de la Ley de Reunión Pacífica y Manifestación Pacífica por su participación en una huelga en agosto de 2019 en la fábrica de tejidos de punto de Myanmar en Patheingyi, región de Ayeyarwady. La huelga se convocó después de que al parecer se pagara a los trabajadores una cantidad inferior al salario mínimo y se les denegaran vacaciones y pausas para ir al baño. Algunos también denunciaron agresiones verbales y acoso sexual por sus empleadores. En febrero se impuso una multa en virtud de esa ley a cinco activistas de los derechos laborales por haber conducido una manifestación de protesta de 400 trabajadores ante las oficinas del Gobierno Regional de Rangún en noviembre de 2019. Dado que las exportaciones nacionales de prendas de vestir están aumentando y que, según se informa, hay planes para construir muchas más fábricas de esas prendas en todo el país, la Relatora Especial subraya la importancia de fortalecer la gobernanza y la protección laboral en Myanmar mediante un proceso consultivo y tripartito.

36. En virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Gobierno tiene la obligación de hacer efectivo el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. Esto implica una remuneración equitativa e igual, unas condiciones seguras y saludables, la igualdad de oportunidades, así como el descanso, la limitación razonable de las horas de trabajo, y vacaciones periódicas y días festivos con remuneración. Myanmar también ha ratificado varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en diciembre de 2019 el Parlamento aprobó la ratificación del Convenio sobre la Edad Mínima, 1973 (núm. 138) de esa Organización. Los trabajadores deben recibir formación sobre sus derechos, y el Gobierno debe proteger los derechos a la libertad de asociación y reunión, y colaborar con las asociaciones de empleadores y los sindicatos para empoderar a los trabajadores y mejorar las condiciones laborales. También deben proseguir las iniciativas para erradicar el trabajo forzoso y las peores formas de trabajo infantil. Las empresas extranjeras y nacionales deben garantizar el respeto de los derechos humanos en todas sus cadenas de suministro, de conformidad con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar”.

5. Diligencia debida

37. Habida cuenta de las cuestiones de derechos humanos relacionadas con el entorno empresarial en Myanmar, la Relatora Especial destaca la importancia de que todas las empresas comerciales ejerzan con mayor rigor la diligencia debida a ese respecto. Mediante el ejercicio de una diligencia debida efectiva y continua las empresas comerciales trasladan a la práctica cotidiana la responsabilidad de respetar los derechos humanos, de conformidad con los Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos.

38. Los procesos de diligencia debida deben incluir la identificación y evaluación de las repercusiones reales o potenciales en los derechos humanos, en particular mediante el análisis de conflictos; la adopción de las medidas apropiadas para impedir o prevenir esas repercusiones y el ejercicio de la influencia para mitigar las repercusiones negativas restantes; el seguimiento de la eficacia de las medidas y procesos para hacer frente a las repercusiones negativas; y la comunicación con las partes interesadas sobre la forma en que

se están abordando ese tipo de repercusiones. Además, es fundamental reparar las repercusiones negativas en los derechos humanos mediante el establecimiento de mecanismos de reclamación a nivel operacional, de conformidad con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (A/73/163, párrs. 10 a 15).

39. Como el Gobierno tiene la obligación de proteger a la población frente a la conculcación de los derechos humanos, incluso por parte de empresas comerciales, la Relatora Especial pide al Gobierno que fomente el ejercicio de la debida diligencia por las empresas mediante el fortalecimiento del marco jurídico, de política y regulatorio. En particular en el contexto de su actual análisis de la política de inversión. El Gobierno debe mostrar liderazgo en el ejercicio de la diligencia debida, por ejemplo, mediante las actividades de las empresas estatales. Los inversores también tienen un papel importante que desempeñar y deben aprovechar su influencia para promover los derechos humanos.

C. Situaciones de conflicto armado y violencia, y el proceso de paz

40. A lo largo de su mandato, la Relatora Especial ha hecho un seguimiento de los conflictos armados y las situaciones de violencia en todo el país. Se esperaba con optimismo que los decenios de conflicto pudieran terminar tras la firma del Acuerdo de Alto el Fuego Nacional en 2015. Sin embargo, el proceso de redacción de ese acuerdo no fue inclusivo, y algunas organizaciones armadas de grupos étnicos clave quedaron excluidas del acuerdo que se firmó y del consiguiente proceso de paz. Los conflictos han proseguido en diferentes momentos en los Estados de Kachín, Shan, Kayin, Chin y Rakáin, con efectos devastadores para la población civil y la presunta comisión de delitos internacionales. En particular el conflicto armado entre el Tatmadaw y las organizaciones armadas de grupos étnicos, incluidas las que son signatarias del acuerdo de cesación del fuego, y entre organizaciones armadas de grupos étnicos. El número de milicias aliadas al Tatmadaw o bajo su mando también ha aumentado durante el mandato (véase el anexo III). Las perspectivas de paz nacional son al parecer inciertas.

1. Estados de Rakáin y Chin

41. En septiembre de 2016, el Gobierno estableció la Comisión Asesora sobre el Estado de Rakáin, dirigida por Kofi Annan e integrada por expertos internacionales y nacionales. La Comisión era imperfecta en su composición, ya que no contaba con miembros rohinyá, y no tenía el mandato de investigar las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, en agosto de 2017 elaboró un informe con conclusiones de gran alcance sobre los problemas que enfrenta la población de Rakáin, incluidas las cuestiones de derechos humanos. Las recomendaciones del informe fueron aceptadas por el Gobierno y la comunidad internacional. El Gobierno afirma que la mayoría de las recomendaciones se han aplicado. Sin embargo, un examen de los informes del comité nacional de aplicación indica que ninguna de las recomendaciones se ha aplicado plenamente y muchas no se han aplicado en absoluto. La aplicación de esas recomendaciones sigue siendo el camino a seguir para Rakáin.

42. Es posible que se hayan perpetrado crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio contra los rohinyás en el norte de Rakáin en 2016 y 2017. La Relatora Especial ha recibido información sobre la violencia, el saqueo, el trabajo forzoso y la extorsión de que son objeto los rohinyás en el norte de Rakáin, así como sobre las continuas restricciones a la circulación y el acceso limitado a los alimentos, los medios de vida, la atención de la salud y la educación. Se sigue imponiendo el uso de tarjetas nacionales de verificación, al parecer con restricciones más estrictas de la circulación para quienes siguen negándose a aceptarlas y beneficios limitados para quienes las reciben.

43. Durante más de un año el conflicto armado entre el ejército de Arakán y el Tatmadaw se ha intensificado, y ha afectado a muchos municipios de Rakáin y al municipio de Paletwa, en Chin. Se ha producido un aumento significativo de las fuerzas de seguridad en los estados de Rakáin y Chin, incluidas la marina y la fuerza aérea de Myanmar. Los intensos combates entre las partes en el conflicto tienen graves repercusiones en los civiles y se han señalado crímenes de guerra. Preocupa a la Relatora Especial que el Tatmadaw

ataque sistemáticamente a los civiles en todo el estado de Rakáin, en particular a los de etnia rakáin, especialmente si son partidarios reales o supuestos del Ejército de Arakán.

44. Actualmente se informa de que debido al conflicto alrededor de 58.000 personas han huido a lugares de desplazamiento, y que hay más de 128.000 personas desplazadas en todo el estado de Rakáin, incluidas las que se refugian en otros pueblos, monasterios y edificios religiosos. La mayoría de los desplazados son de etnia rakáin, mientras que se estima que 1.800 personas, principalmente de etnia chin, están desplazadas dentro del estado de Chin. En enero se informó de que soldados de la 66ª División de Infantería Ligera del Tatmadaw destruyeron un lugar de desplazamiento temporal en Myebon, dispararon al aire para desalojar a los desplazados internos y dieron pocas razones o advertencias a los organizadores del campamento.

45. El 3 de febrero se volvió a imponer una suspensión total de los servicios de Internet móviles en Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung y Myebon, estado de Rakáin, y en Paletwa, estado de Chin, durante tres meses, como “medida de seguridad” y por motivos de “interés público”. El acceso a Internet ya había sido interrumpido en esos municipios de junio a agosto de 2019. Los habitantes de las ciudades de Ponnagyun, Mrauk-U, Kyauktaw y Minbya se han visto privados de acceso a los servicios de Internet móviles, de forma indefinida, desde junio de 2019. La interrupción del acceso tiene graves repercusiones en los derechos fundamentales de más de 1 millón de personas. El Gobierno no ha demostrado que la interrupción general del servicio, que puede equivaler a un castigo colectivo, fuera necesaria y proporcionada. La Relatora Especial está profundamente preocupada porque ha recibido informes de que las operaciones de seguridad en Maungdaw, Buthidaung y Rathedaung se habían intensificado en febrero de 2020, causando algunos muertos y docenas de heridos entre la población civil. Miles de personas huyeron de sus aldeas en Buthidaung y Rathedaung, así como de Kyauktaw y Mrauk-U, municipios sometidos a bombardeos diarios que habrían incendiado muchas casas. El 13 de febrero, 21 niños khami de la aldea Kha Mawe Cahung, en Buthidaung, resultaron heridos después de que su escuela fuera bombardeada, según se informó.

46. Los toques de queda aplicados de forma estricta en todos los municipios afectados por el conflicto desde abril de 2019, que se suman a los que ya están en vigor en Maungdaw, Buthidaung y Rathedaung, tienen una amplia repercusión en los derechos, los medios de vida y los servicios, entre ellos la atención de la salud y la educación. Desde enero de 2019 el Gobierno ha impuesto restricciones al acceso humanitario, lo que ha agravado los efectos del conflicto.

47. Se han señalado reiteradamente tiroteos y combates indiscriminados en las proximidades de las aldeas que han causado múltiples muertos y heridos entre la población civil, incluidos niños. También se han recibido informes de incendios intencionados en aldeas. En diciembre, según se informó, soldados del Tatmadaw entraron disparando sus armas en la aldea de Satetara, municipio de Minbya, y una mujer habría resultado muerta. Según se cuenta, los soldados golpearon al administrador de la aldea hasta la muerte. También se encontró el cuerpo del administrador de la aldea de Kyaukmaw, que estaba de visita. El Gobierno debe llevar a cabo investigaciones sobre todos estos incidentes y los autores deben rendir cuentas.

48. En noviembre de 2019, más 500 personas fueron detenidas por su presunta asociación con el Ejército de Arakán en el Estado de Rakáin. La Relatora Especial expresa preocupación por las denuncias de torturas y tratos inhumanos y degradantes durante la reclusión; en 2019 se señaló la muerte de varios reclusos en el Estado de Rakáin. También está muy preocupada porque familiares de oficiales superiores del Ejército de Arakán, incluidos los que residen fuera de Myanmar, sean objeto de detención con fines políticos. Ha recibido información que indica que el Ejército de Arakán secuestró a funcionarios locales, entre ellos el administrador de la aldea de Taung Shey, municipio de Myebon, el 21 de febrero.

49. La escalada del conflicto ha provocado un aumento significativo de la utilización de niños por el Tatmadaw, entre otras cosas para cavar trincheras, construir vallas, transportar ladrillos, desbrozar matorrales y cosechar. La Relatora Especial observa que el reclutamiento y la utilización de niños por el Tatmadaw constituyen violaciones de las

obligaciones internacionales del país y de la Ley de los Derechos del Niño de 2019 y que los autores deben rendir cuentas por ello.

2. Estados de Kachín y Shan

50. Se alega que se han perpetrado crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Kachín y Shan desde 2011. En septiembre de 2019, el Tatmadaw no renovó alto el fuego unilateral en cinco comandancias regionales que incluían el norte del estado de Shan. La Alianza de la Fraternidad, que incluye al Ejército de Liberación Nacional Taang, el Ejército de Arakán y el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar, ha anunciado que su alto el fuego unilateral se extiende hasta el 25 de marzo de 2020.

51. Durante todo el mes de noviembre de 2019, se produjeron enfrentamientos esporádicos entre el Tatmadaw y el Ejército de Liberación Nacional Taang en el municipio de Kutkai, y entre el Tatmadaw y el Consejo de Restauración del Estado Shan en el municipio de Namtu. En diciembre tuvo lugar un enfrentamiento entre el Tatmadaw y el Ejército para la Independencia de Kachín en el municipio de Muse. A pesar de la distensión del conflicto desde agosto de 2019, la seguridad y la protección siguen siendo motivo de grave preocupación. Según se informa, entre agosto de 2019 y enero de 2020, 75 civiles resultaron heridos, 88 civiles fueron recluidos por el Tatmadaw o grupos de milicias y 6 civiles fueron torturados.

3. Estados de Kayin y Mon

52. Las tensiones continúan en el Estado de Kayin entre el Tatmadaw y la Unión Nacional Karén y su Ejército de Liberación Nacional Karén debido a las actividades que lleva a cabo el Tatmadaw desde 2018 para construir una carretera en el municipio de Lu Thaw (en el territorio de la Unión Nacional Karén). La Unión Nacional Karén afirma que la construcción de la carretera viola el Acuerdo Nacional de Alto el Fuego y que el Tatmadaw está ampliando su despliegue de tropas en la zona. El 9 de enero el Tatmadaw y el Ejército de Liberación Nacional Karén libraron combates en Lu Thaw en los que resultaron heridos dos civiles. A principios de febrero, según se informa, el Tatmadaw bombardeó Tu Thaw y causó la huida de más de 300 aldeanos.

53. En noviembre de 2019, el Tatmadaw y sus fuerzas de vigilancia de fronteras aliadas entablaron combates con el Ejército de Liberación Nacional Mon, el ala armada del Nuevo Partido del Estado de Mon, que resultaron en la toma por el Tatmadaw de una base del Ejército de Liberación Nacional de Mon. Los combates tuvieron lugar cerca del Paso de las Tres Pagodas en la frontera tailandesa y provocaron la huida a Tailandia de más de 1.000 aldeanos Mon, que desde entonces han regresado a sus hogares. El nuevo Partido del Estado de Mon considera esta acción como una violación del Acuerdo Nacional de Alto el Fuego. El 3 de diciembre de 2019 el ejército se retiró de la base del Ejército de Liberación Nacional Mon, pero sigue ocupando uno de sus puestos de avanzada en la zona. La población local señala que teme que la tensión y la proximidad del Tatmadaw puedan provocar otro enfrentamiento.

4. Minas terrestres

54. Las partes en los conflictos siguen utilizando minas terrestres y artefactos explosivos improvisados, que ocasionan la muerte y la mutilación de civiles. Según se informa, 221 civiles resultaron muertos o heridos por minas terrestres y artefactos explosivos improvisados en 2019, y solo en enero de 2020 murieron 7 civiles y 32 resultaron heridos. Un joven de la aldea de Myoi Thit, en el municipio de Nam San, Estado de Shan, al parecer resultó muerto por una mina terrestre cuando estaba recogiendo agua el 9 de enero. La Relatora Especial considera que esos incidentes no se denuncian suficientemente debido a la restricción del acceso humanitario en las zonas afectadas por el conflicto. Se acogen con agrado los planes del Gobierno de establecer una autoridad nacional de actividades relativas a las minas, y la Relatora Especial espera que el Gobierno se esfuerce por establecer un programa acción humanitaria antiminas acorde con las normas internacionales.

5. Desplazados internos

55. El 19 de diciembre de 2019 el Gobierno aprobó un plan estratégico para el reasentamiento de los desplazados internos y el cierre de los campamentos para esas personas. La estrategia se remite a las normas internacionales, en particular las soluciones duraderas, la seguridad y la dignidad, la voluntariedad y la sostenibilidad, el pleno disfrute de los derechos humanos, la no discriminación, el principio de “no causar daño” y el acceso humanitario. La Relatora Especial pide al Gobierno que asegure que su aplicación se ajuste a las normas internacionales y adopte un enfoque basado en los derechos humanos. Los desplazados internos deben tener el derecho al retorno a su lugar de origen o de elección. Insta al Gobierno a que no proceda al retorno prematuro de las personas ni a su reasentamiento en zonas afectadas por conflictos armados o minas terrestres, y a que aborde las causas del desplazamiento antes de cualquier retorno.

56. Alrededor de 500 aldeanos de la aldea de Nam San Yang en el municipio de Waingmaw, estado de Kachín, han regresado a sus hogares desde enero de 2019. En noviembre de 2019, se produjo un enfrentamiento entre el Tatmadaw y el Ejército de Independencia de Kachín cerca de la aldea, que hizo temer a los aldeanos que se verían obligados a huir de nuevo. También se ha informado a la Relatora Especial de que los aldeanos no pueden cultivar sus tierras debido a la contaminación por minas terrestres, lo que les deja escaso acceso a los alimentos y medios de subsistencia.

57. La Relatora Especial visitó varias veces a los desplazados internos en Sittwe y vio las deplorables condiciones en que más de 130.000 personas, en su mayoría rohinyá, han estado confinadas durante casi ocho años. La Relatora Especial también visitó a los desplazados internos en Kachín, donde hay 97.000 personas desplazadas, y en Shan, donde están desplazadas 9.600, todas las cuales han estado viviendo en campamentos de desplazados desde aproximadamente 2011. Las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias internacionales no han tenido acceso a 40.000 personas desplazadas en zonas controladas por organizaciones armadas de grupos étnicos en Kachín desde mediados de 2016, y el acceso de las organizaciones humanitarias internacionales y nacionales a las zonas controladas por el gobierno en Kachín y en el norte de Shan es limitado.

6. Refugiados

58. La Relatora Especial ha visitado a los refugiados rohinyá en los campamentos de Bazar de Cox desde 2016, cuando hasta 80.000 personas huyeron de ese lugar después de las operaciones de seguridad realizadas en Rakáin ese mes de octubre. Actualmente hay 914.998 refugiados rohinyá en los campamentos de Bazar de Cox, de los cuales más de 730.000 huyeron después de las operaciones de seguridad de agosto de 2017, y siguen llegando refugiados. Si bien a fines de 2017 los Gobiernos de Bangladesh y Myanmar llegaron a un acuerdo de repatriación y se han hecho dos intentos de iniciarla, los refugiados siguen afirmando que no regresarán a sus hogares hasta que puedan hacerlo en condiciones de seguridad y dignidad. Las condiciones en Myanmar no son propicias para su retorno en este momento y deben introducirse grandes cambios para que así sea. La Relatora Especial acoge con satisfacción el reciente anuncio del Gobierno de Bangladesh de que pondrán en marcha un programa de educación formal para niños rohinyá siguiendo el plan de estudios de Myanmar. Sin embargo, preocupan a la Relatora Especial las limitaciones impuestas recientemente en los campamentos que son motivo de inquietud para los refugiados y los planes para reubicarlos en Bhashan Char. Todas las decisiones relativas a los refugiados deben aplicarse con su consentimiento pleno, previo e informado.

59. Alrededor de 100.000 refugiados de Myanmar permanecen en campamentos en Tailandia. La situación en ese lugar se ha deteriorado, ya que en las prioridades de los donantes no se ha reconocido que la situación en Myanmar sigue siendo inestable. El temor a la contaminación por minas terrestres, la militarización en curso y la reanudación del conflicto impiden el regreso de los refugiados en Tailandia. Se ha informado a la Relatora Especial de la inquietud de los refugiados en relación con la reunión de datos para la “verificación pre nacional” por el Gobierno de Myanmar. Este proceso no debe llevarse a cabo sin salvaguardias y su consentimiento pleno, previo e informado.

III. Conclusión

A. El camino a seguir

1. Diálogo nacional

60. Si bien la transición democrática en Myanmar comenzó alrededor de 2010, para la Relatora Especial es evidente que sigue estando en sus primeras etapas. Incluso en el marco de los límites constitucionales impuestos por el ejército, el Gobierno dirigido por la Liga Nacional para la Democracia ha tenido todas las oportunidades de demostrar su liderazgo y emprender reformas encaminadas a continuar la transición y mejorar la situación de los derechos humanos. Sin embargo, esas oportunidades no se han aprovechado. Ha habido retrocesos en muchas esferas, especialmente en el espacio democrático, el proceso de paz se ha estancado, el conflicto armado prosigue y es posible que se hayan cometido delitos de derecho internacional. Si bien la modificación de la constitución era un objetivo clave y se han hecho algunos intentos de iniciar el proceso, esas iniciativas difícilmente lograrán resultados en este momento ya que el ejército sigue oponiéndose. A la Relatora Especial le preocupa mucho que el país pueda estar alejándose de la democracia; sin embargo, considera que no es demasiado tarde para cambiar de rumbo.

61. A este respecto, la Relatora Especial propone que Myanmar inicie un diálogo nacional para unir al país, ofrecer un foro de debate y discusión sobre el pasado y el futuro, y reavivar una visión de la construcción de la nación. El diálogo nacional debe ser inclusivo, participativo y estar firmemente basado en los derechos humanos. Debe contar con la participación de interesados de todo el país, entre ellos mujeres, hombres, jóvenes, personas con discapacidad, personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, la sociedad civil y personas de diferentes religiones y etnias, e incluir a los refugiados que permanecen fuera del país. Una verdadera implicación local en el proceso sería esencial: el diálogo a nivel local debe alimentar el diálogo a nivel estatal, regional y nacional. Ese diálogo debe abordar, con transparencia y participación pública en todo momento, una gama de cuestiones más amplia que el actual proceso de paz, en particular el espacio cívico, el uso de la tierra, el reparto de los recursos, el desarrollo sostenible, las secuelas del conflicto y el regreso de los refugiados y los desplazados internos. Además, debe abordar los actuales problemas de la discriminación y la desigualdad, con miras a avanzar hacia una sociedad igualitaria, tolerante y pluralista. En el marco del diálogo es preciso examinar los motivos de las reclamaciones y estudiar enfoques centrados en las víctimas para resolverlas, incluidos los mecanismos de justicia de transición para promover la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición. Ese diálogo debe generar un consenso sobre el futuro de la nación y podría incluir propuestas para la paz y la reforma constitucional, jurídica, de la seguridad y administrativa. Esto sentaría una base sólida para proseguir la transformación democrática.

2. Justicia y rendición de cuentas

62. La Comisión Independiente de Investigación establecida por el Gobierno presentó su informe al Presidente el 21 de enero de 2020. La Relatora Especial ha examinado el resumen ejecutivo publicado por la Oficina del Presidente, así como los anexos 16 a 28, y pide de nuevo que se publique el informe completo. Sin el informe completo, es imposible comprender el fundamento de las conclusiones de hecho y de las conclusiones jurídicas. La Relatora Especial observa que no se dispone de información sobre los métodos utilizados para obtener la mayor parte de la información presentada ni sobre las fuentes. Sigue poniendo en tela de juicio que la Comisión sea independiente e imparcial y señala que cita hechos y cifras que según afirma le fueron facilitados por el Gobierno, aparentemente sin cuestionarlos. En particular el número de personas que huyeron a Bangladesh que, según observa, es muy inferior al registrado por las Naciones Unidas y el Gobierno de Bangladesh. Las conclusiones de que no existen pruebas de violación o de violación colectiva, o de que

los registros realizados por personal de defensa masculino podían constituir violencia sexual, no son creíbles. La Relatora Especial recuerda las entrevistas que ha mantenido con rohinyá supervivientes de la violencia sexual, incluida la violación. Varias conclusiones son análogas a las declaraciones formuladas por el Gobierno en ocasiones anteriores, entre ellas la afirmación de que los rohinyás incendiaron sus propias casas, sin aportar prueba alguna.

63. La Comisión determinó que en el norte de Rakáin se habían cometido crímenes de guerra, graves violaciones de los derechos humanos y violaciones del derecho interno después del 25 de agosto de 2017, y al parecer el Auditor General y el Fiscal General están realizando ahora nuevas investigaciones. Es muy poco probable que los principales responsables rindan cuentas alguna vez, ya que los crímenes de guerra no existen en el derecho interno. Además, en virtud de la Ley de Servicios de Defensa de 1959, las únicas violaciones de los derechos humanos que están tipificadas como delito son el asesinato, el homicidio culposo y la violación, y estas categorías no abarcan todos los delitos que se cometieron. La Relatora Especial teme que la labor de la Comisión no haga más que perpetuar la impunidad. Aconseja a la comunidad internacional que no acepte el resumen ejecutivo del informe de la Comisión, a fin de avanzar hacia una verdadera rendición de cuentas, y que siga de cerca las respuestas del Gobierno y el ejército.

64. Desde 2016 se han realizado importantes avances en el plano internacional para lograr que se haga justicia por los presuntos delitos cometidos en el Estado de Rakáin. La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional autorizó la apertura de una investigación sobre la situación en Bangladesh y Myanmar el 14 de noviembre de 2019. Se investigarán los presuntos delitos en los cuales al menos un elemento se haya producido en el territorio de Bangladesh o de otro Estado parte después del 1 de junio de 2010, o antes de esa fecha si se trata de delitos continuados. La Relatora Especial señala que la investigación abarca todo delito que sea competencia de la Corte relacionado con los actos de violencia que tuvieron lugar en Rakáin en 2016 y 2017, y podría incluir a personas o grupos distintos de los rohinyás.

65. El 11 de noviembre de 2019, Gambia presentó una demanda contra Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia en la que alegaba la violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y solicitaba la adopción de medidas provisionales. Durante la audiencia sobre la cuestión de las medidas provisionales, el Consejero del Estado, en su calidad de agente¹ de Myanmar, se dirigió a la Corte y declaró que el 25 de agosto de 2017 había estallado un conflicto armado interno en el que podrían haberse cometido crímenes de guerra, actos de uso desproporcionado de la fuerza y violaciones de los derechos humanos. Es la primera vez que el Gobierno reconoce estos hechos y es positivo que haya dejado de adoptar la anterior actitud de negación. El 23 de enero de 2020, la Corte determinó que Gambia había presentado indicios razonables y que la Corte tenía competencia *prima facie* en este caso, e indicó la adopción de medidas provisionales para Myanmar. La Relatora Especial exhorta a Myanmar a que cumpla las medidas provisionales. Observa que el Canadá y los Países Bajos han expresado públicamente su intención de estudiar conjuntamente todas las opciones para apoyar y ayudar a Gambia en sus esfuerzos ante la Corte, y Maldivas anunció que haría una declaración para intervenir en favor de los rohinyás; alienta a otros Estados a que sigan su iniciativa.

66. Las organizaciones de la sociedad civil de la Argentina han presentado una demanda penal, en virtud del principio de la jurisdicción universal, por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra los rohinyás. La Relatora Especial alienta a que se inicien otros procedimientos en diferentes Estados en el marco de la jurisdicción universal. El Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar ya ha entrado en funcionamiento y podría ayudar a los Estados a ese respecto. Hay que hacer más para lograr que se rindan cuentas y se haga justicia a todas las víctimas de

¹ Los Estados partes en una causa presentada ante la Corte Internacional de Justicia están representados por un agente, que desempeña la misma función que un abogado en un tribunal nacional, pero que también tiene la facultad de vincular al Estado soberano.

Myanmar que han sufrido a manos de los militares. El mandato del Mecanismo, que abarca todo el país, es primordial para ello. El Consejo de Seguridad debería remitir la situación a la Corte Penal Internacional, o la comunidad internacional debería establecer un tribunal internacional para juzgar a los presuntos autores de los delitos internacionales cometidos en Myanmar.

67. La transición de Myanmar nunca culminará si no se pone fin a la impunidad que reina en todos los niveles del sistema de justicia. El Gobierno tiene la responsabilidad de hacer que los autores rindan cuentas. Para ello, debe reformar el sistema de justicia, garantizar la independencia judicial, eliminar los obstáculos sistémicos a la rendición de cuentas y crear capacidad judicial y de investigación de conformidad con las normas internacionales. Es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos que las violaciones de los derechos humanos estén bajo la jurisdicción de los tribunales militares. Deben modificarse las disposiciones de la Constitución que otorgan la jurisdicción sobre los delitos cometidos por el ejército exclusivamente a los tribunales militares, que no ofrecen posibilidad de apelación y garantizan al personal militar la inmunidad judicial por actos realizados antes de 2011. Además, debe revisarse la Ley de Servicios de Defensa para que los delitos que constituyen violaciones de los derechos humanos cometidos por el ejército queden bajo la jurisdicción de los tribunales civiles. La policía, incluida la policía de la guardia de fronteras, está sujeta a la Ley de Mantenimiento de la Disciplina de la Fuerza de Policía de Myanmar de 1995, que también debe revisarse para que los delitos que constituyen violaciones de los derechos humanos cometidos por la policía queden bajo el control de los tribunales civiles. Los delitos internacionales, incluidos los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, deben definirse en el derecho penal interno. El sistema de justicia debe reformarse para proporcionar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos un recurso efectivo, de modo que se ofrezca una reparación integral y efectiva, que incluya la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.

3. Estado de derecho, reforma y creación de capacidad para proteger los derechos

68. El estado de derecho era una de las prioridades de la Liga Nacional para la Democracia, pero no se estableció aunque es esencial para la consolidación de la democracia. Prueba de ello son los enjuiciamientos que habitualmente vulneran el derecho de las personas a un juicio imparcial y los casos de grave denegación de justicia. La Relatora Especial recuerda la condena de Wa Lone y Kyaw Soe Oo, de Reuters, que fueron declarados culpables en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de 1923 por haber revelado una masacre en Inn Din, estado de Rakáin, en 2017. A lo largo de su mandato, la Relatora Especial ha recomendado la reforma de las leyes que puedan violar los derechos humanos y ha proporcionado una lista no exhaustiva de las disposiciones legislativas que deben reformarse (A/HRC/31/71, anexo), a la que hizo referencia en sus propuestas de puntos de referencia conjuntos. Muy pocas de las disposiciones que enumeró han sido modificadas o derogadas y el proceso de examen y redacción de leyes sigue careciendo de transparencia. Sería necesario llevar a cabo un proceso de consulta sistemático para la redacción y el examen de la legislación, a fin de garantizar una consulta adecuada con las partes interesadas.

69. La Ley de Ciudadanía debe ser reformada con urgencia. Se sigue aplicando de manera discriminatoria y cada vez es mayor el temor de que esto pueda convertir a los musulmanes de fuera de Rakáin en apátridas. El proceso de la tarjeta nacional de verificación debe terminar, ya que carece de fundamento jurídico, es discriminatorio y, según las cifras proporcionadas por el Gobierno, no da lugar al reconocimiento de la ciudadanía. Preocupa a la Relatora Especial la información recibida de que se han expedido tarjetas nacionales de verificación a hindúes y otras minorías religiosas. El tejido social de Myanmar no debe basarse en una jerarquía de situaciones en relación con la ciudadanía sino en la igualdad. Debe eliminarse el vínculo entre la ciudadanía y la pertenencia a una “raza nacional” y, en cambio, deben reconocerse los beneficios de la diversidad.

70. La propuesta de ley de prevención de la violencia contra la mujer se ha presentado al Parlamento. La Relatora Especial ha planteado reiteradamente cuestiones sobre algunos de sus contenidos; debe cumplir plenamente las normas internacionales y las obligaciones que incumben a Myanmar en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Todas las formas de violencia sexual, en particular, deben ser tipificadas como delito. Se ha comunicado a la Relatora Especial que se están formulando normas y procedimientos para aplicar la Ley de los Derechos del Niño, que deberían aprobarse rápidamente. Los principios rectores de la no discriminación y el interés superior del niño revisten particular importancia para el acceso a la salud y la educación.

71. La Relatora Especial observa que, para que el país progrese, es necesario proteger los derechos mediante la introducción de reformas, el aumento de la capacidad y la modernización en todos los niveles de gobernanza. La Constitución debe modificarse para que garantice los derechos de todos y no contenga vagos motivos para imponer restricciones que no se ajusten al derecho internacional, como la preservación de “la paz y la tranquilidad de la comunidad”. Además, todo el Gobierno y las fuerzas de seguridad deben estar bajo control civil. A este respecto, señala los progresos realizados en relación con el Departamento Administrativo General, que pasó a estar bajo control civil en 2019.

72. El Gobierno debe seguir colaborando con la comunidad internacional a fin de crear instituciones modernas que tengan capacidad y competencias para cumplir su función de servir a la población del país, sin discriminación. Esto incluye la reforma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Myanmar para que se ajuste a los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos (Principios de París) y se convierta en una institución que promueva y proteja realmente los derechos humanos. A la Relatora Especial le desalentó el reciente nombramiento de miembros de la Comisión. La nueva Comisión cuenta ahora con cuatro mujeres, es decir, tres más que antes. Sin embargo, no hubo transparencia en los nombramientos y no hay diversidad religiosa o étnica, no cuenta con ningún miembro de la sociedad civil y todos los miembros de la Comisión son ex funcionarios públicos vinculados de forma directa o indirecta al ejército. Esto refleja un grave retroceso en la promoción de los derechos humanos.

4. Instrumentos y mecanismos internacionales

73. Myanmar debe pasar a ser parte en todos los demás instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos a los que aún no se ha adherido, y debe incorporar esos derechos en sus leyes, políticas y prácticas. Esto también es aplicable a la incorporación de las obligaciones contraídas en virtud de los tratados en los que ya es parte. De esta manera Myanmar dispondrá de los medios necesarios para introducir reformas que le permitan continuar la transición y resolver problemas de larga data. La participación en todos los mecanismos de derechos humanos, incluidos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, el examen periódico universal y los órganos creados en virtud de tratados, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), proporcionará a Myanmar la orientación y la asistencia necesarias. La Relatora Especial observa que Myanmar tiene varias obligaciones pendientes y previstas de presentación de informes que debe cumplir.

IV. Recomendaciones

74. La Relatora Especial recuerda las recomendaciones que ha formulado anteriormente y no se han aplicado, y pide que se apliquen. Formula recomendaciones particulares al Gobierno en relación con las esferas temáticas sobre las que ha informado, así como recomendaciones para ayudarle a avanzar. Recomienda al Gobierno que:

a) Organice y celebre un diálogo nacional que sea inclusivo y participativo y esté basado en los derechos humanos, en el que intervenga una amplia variedad de interesados de todo el país en los planos local, estatal, regional y nacional, a fin de sentar las bases para que la transformación democrática siga adelante;

b) Firme y ratifique todos los instrumentos fundamentales de derechos humanos. Colabore plenamente con los mecanismos internacionales de derechos humanos, entre ellos los órganos creados en virtud de un tratado, el proceso del examen periódico universal y los titulares de mandatos de los procedimientos especiales, y asegure el cumplimiento oportuno de sus obligaciones de presentación de informes;

c) Abra una oficina del ACNUDH en el país con un mandato completo;

d) Dé cumplimiento a su declaración de que cooperará plenamente con el próximo Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar.

75. En lo relativo al espacio democrático, la Relatora Especial recomienda al Gobierno que:

a) Amplíe el espacio para mantener un debate público libre y abierto entre todos los miembros de la comunidad antes de las elecciones, garantice que todas las personas con derecho a voto puedan ejercerlo, en particular en los Estados afectados por conflictos, restablezca el derecho de voto de los rohinyás y asegure que las elecciones sean transparentes, inclusivas, participativas, libres e imparciales y estén abiertas a observadores y medios de comunicación locales e internacionales independientes;

b) Retire el proyecto de ley sobre las expresiones de odio, trabaje en consulta abierta con una amplia gama de interesados locales e internacionales sobre una ley eficaz contra la discriminación y adopte medidas positivas de amplio alcance para combatir la incitación a la violencia, la discriminación y el odio de conformidad con el Plan de Acción de Rabat;

c) Se oponga públicamente los discursos nacionalistas, extremistas y populistas y promueva el pluralismo, la tolerancia y la inclusión;

d) Libere a todos los presos políticos y les ofrezca reparación y rehabilitación, retire todas las acusaciones formuladas contra personas por expresión legítima y actividad democrática y ponga fin a todas las acusaciones por motivos políticos que contravengan los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación.

76. En lo relativo a los derechos sobre la tierra, las empresas y los derechos humanos, la Relatora Especial recomienda al Gobierno que:

a) Reconozca y proteja los derechos de tenencia de la tierra de quienes practican el uso comunal y consuetudinario de la tierra y de los desplazados por conflictos, y ponga fin a los desalojos forzosos y a las confiscaciones de tierras sin consulta y sin una indemnización adecuada, de conformidad con las normas internacionales;

b) Apruebe una ley nacional sobre la tierra en consonancia con la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y el derecho y las normas internacionales, tras un proceso de redacción transparente y consultivo, y reforme posteriormente las leyes existentes de uso y apropiación de la tierra para que sean compatibles con la ley nacional sobre la tierra, de conformidad con las normas internacionales;

c) Dé prioridad a un proceso inclusivo y consultivo encaminado a elaborar un marco jurídico apropiado para la protección de datos que se ajuste a las normas internacionales y modifique la Ley de Telecomunicaciones de 2013 para armonizarla con las normas internacionales;

d) Siga reformando el marco jurídico que regula la extracción de recursos naturales para reducir las incoherencias y la complejidad, en consulta con las comunidades afectadas y la sociedad civil, proporcione recursos y capacitación

suficientes para hacer cumplir la reglamentación ambiental y social, asegure que las comunidades afectadas tengan derecho a la reparación y aplique y haga cumplir el Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental de 2015;

e) Siga participando en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas y garantice que los requisitos de presentación de informes aplicables a las empresas extractivas sean transparentes, coherentes y exigibles, de conformidad con las normas de la Iniciativa;

f) Asegure que el proyecto de ley sobre el petróleo respalde el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Establezca un sistema equitativo de distribución de los ingresos;

g) Proteja los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación y reunión, colabore con las asociaciones de empleadores y los sindicatos para poner fin al trabajo forzoso y al trabajo infantil peligroso, empodere a los trabajadores de Myanmar y mejore las condiciones de trabajo;

h) Aliente la diligencia debida entre las empresas mediante un marco jurídico, de política y regulatorio eficaz, de conformidad con los Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos.

77. En lo relativo a las situaciones de conflicto armado y violencia, la Relatora Especial recomienda al Gobierno, las organizaciones militares y las organizaciones armadas de grupos étnicos que:

a) Respeten estrictamente el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos durante las hostilidades, en particular protegiendo a todos los civiles y los bienes de carácter civil, y pongan fin a las conductas que constituyen violaciones graves contra los niños;

b) Ponga fin de inmediato al uso de minas terrestres, ratifique la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, retire las minas y los artefactos sin estallar, señalice y vallee las zonas minadas, y lleve a cabo actividades sistemáticas de sensibilización al peligro de las minas;

c) Permita de inmediato el acceso pleno y sin restricciones de la ayuda humanitaria a las personas necesitadas en todas las zonas afectadas por los conflictos armados y la violencia, así como el acceso de los medios de comunicación y los observadores de los derechos humanos;

d) Establezca las condiciones que permitan el regreso voluntario, seguro, digno y sostenible de todos los refugiados de Myanmar, garantice que los refugiados que regresen gocen de sus derechos fundamentales, entre ellos la justicia, la ciudadanía, el retorno a sus lugares de origen y la indemnización por bienes quemados, dañados o saqueados, así como un acceso adecuado a los medios de vida, la educación y la atención de la salud;

e) Garantice que todo cierre de los campamentos de desplazados internos cumpla plenamente las normas internacionales y respete los derechos de esas personas, y que los desplazados regresen a su lugar de origen o de elección y no sean reasentados en zonas afectadas por conflictos armados o minas terrestres.

78. En lo relativo al estado de derecho, la Relatora Especial recomienda al Gobierno que:

a) Elimine la impunidad estructural, en particular mediante la modificación de la Constitución, la Ley de Servicios de Defensa de 1959 y la Ley de Mantenimiento de la Disciplina de la Fuerza de Policía de Myanmar de 1995, a fin de que los delitos que constituyen violaciones de los derechos humanos queden bajo la jurisdicción de tribunales civiles independientes, y apruebe leyes que tipifiquen los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio de conformidad con las normas internacionales;

b) Reforme la Constitución, entre otras cosas a fin de establecer un control civil sobre todos los ministerios gubernamentales y las fuerzas de seguridad, y reconocer derechos y libertades para toda la población de conformidad con el derecho internacional;

c) Reforme todas las leyes que puedan violar los derechos humanos, incluidas las citadas en el informe de la Relatora Especial sobre la situación en 2016 (A/HRC/31/71, anexo);

d) Establezca un proceso de consulta sistemático para la redacción y el examen de modificaciones y de nuevos proyectos de ley;

e) Reforme la Ley de Ciudadanía de 1982, en particular suprimiendo la jerarquía de clases de ciudadanos y la dependencia de la “raza nacional” como factor determinante de la ciudadanía, garantice que toda nueva ley de ciudadanía se aplique sin discriminación, detenga el proceso de la tarjeta nacional de verificación y restablezca la ciudadanía a los rohinyás;

f) Apruebe la propuesta ley de prevención de la violencia contra la mujer y garantice que cumpla las normas internacionales y las obligaciones contraídas por Myanmar en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;

g) Elabore rápidamente normas y procedimientos para aplicar la Ley de los Derechos del Niño de 2019, de conformidad con los principios rectores de la no discriminación y el interés superior del niño;

h) Publique el informe completo de la Comisión Independiente de Investigación;

i) Cumpla plenamente las medidas provisionales indicadas por la Corte Internacional de Justicia y coopere con la Corte Penal Internacional y el Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar;

j) Reforme la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Myanmar para garantizar su plena conformidad con los Principios de París, en particular su ley fundacional, y nombre a miembros que defiendan la independencia de la Comisión y representen a la sociedad civil, y que incluyan a las minorías étnicas y religiosas a fin de reflejar la diversidad del país.

79. La Relatora Especial recomienda a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional que:

a) Remitan inmediatamente la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional o establezcan un tribunal internacional para juzgar a los presuntos autores de delitos internacionales;

b) Consideren la posibilidad de iniciar procesos contra los presuntos autores de delitos internacionales en el marco de la jurisdicción universal;

c) Apoyen la demanda presentada por Gambia contra Myanmar en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio ante la Corte Internacional de Justicia;

d) Promuevan un diálogo nacional en Myanmar y garanticen que sea inclusivo, participativo y esté basado en los derechos humanos, y que cuente con la participación de una amplia variedad de interesados de todo el país en los planos local, estatal, regional y nacional;

e) Ayuden a Myanmar a llevar a cabo una amplia reforma, en particular del sector de la justicia y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Myanmar, y a crear instituciones modernas que presten servicios a la población del país sin discriminación;

f) Alienten a Myanmar a que firme y ratifique todos los instrumentos básicos de derechos humanos, colabore plenamente con los mecanismos

internacionales de derechos humanos y abra una oficina del ACNUDH en el país con un mandato completo;

g) Asegure que las empresas que operan en Myanmar respeten los derechos humanos en todas sus actividades y cadenas de suministro, de conformidad con los Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos, y actúen con la diligencia debida, en particular en las zonas de conflicto, y consideren la posibilidad de reducir las ventas si se determina que los riesgos son demasiado elevados;

h) Colaboren con el Tatmadaw y todas las organizaciones armadas de grupos étnicos con miras a su supresión de la lista de grupos que reclutan y utilizan a niños, incluida en el anexo a los informes del Secretario General;

i) Aseguren la plena financiación de los programas de asistencia humanitaria dentro y fuera de Myanmar, incluidos el apoyo a Bangladesh y la financiación del plan de respuesta conjunta a la crisis humanitaria de los rohinyás, así como de los programas de asistencia a los refugiados en Tailandia;

j) Trabajen de consuno para ayudar al Gobierno de Myanmar a cumplir sus obligaciones de derechos humanos y ejecuten y financien programas en Myanmar sobre la base de ciertos principios, condicionando los parámetros y la financiación a la realización de verdaderos esfuerzos de reforma.

Annex I



Permanent Mission of the Republic of the Union of Myanmar to
the United Nations Office and other International Organizations
47 avenue Blanc, 1202 Geneva, Switzerland
Tel. (+41-22) 906-9870, 906-9871/ Fax. (+41-22) 732-8919
E-mail: mission@myanmargeneva.org

No. 639 / 3-27 / 91

30 December 2019

Madame,

I am writing this letter to you in response to your proposal on 12 December 2019 to visit my country in connection with the mandate of Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar.

As a member of the United Nations, Myanmar believes in enhancing cooperation with the UN through a constructive engagement to address human rights issues.

It is in the spirit of cooperation that the authorities of Myanmar had granted you to visit the country to carry out your mandate as UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar.

However, as we have repeatedly stated that, your continued failure to comply with the code of conduct, as well as the lack of impartiality and the lack of genuine goodwill towards Myanmar in a non-objective manner have caused not only public resentment against you but also negative effects to my country in its democratic transition.

In this regard, I am obliged to reaffirm Myanmar's position to discontinue cooperation with you and our inability to accept your proposed visit at this time.

Please accept, Madame, the assurances of my highest consideration.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kyaw Moe Tun'.

(Kyaw Moe Tun)

Ambassador and Permanent Representative

United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar

Annex II

Questions for Government of Myanmar from UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar

Previous recommendations

1. Please provide information on your plans to implement the recommendations in my report to the General Assembly of October 2019.

Law and institutional reform

2. I understand that the Constitutional Amendment Committee has now submitted two Charter Amendment Bills to parliament. Please provide an update on the progress of this.
3. I refer to the non-exhaustive list of laws, which are not compatible with human rights standards and are in need of reform, provided in my report to the Human Rights Council of March 2016. What progress has been made to amend this legislation? Please give a detailed list of laws from that list that have been amended or reformed.
4. Please provide an update on the progress of the Prevention and Protection of Violence against Women Law, and in particular how the law will define sexual violence so as to properly protect women and meet international standards.
5. I understand that committee under the Office of the Attorney General tasked with drafting the National Land Law has been established. Please provide details on the progress being made in drafting the National Land Law, and on how the Law will be aligned with the National Land Use Policy.
6. Please provide an update on the progress of the draft Prisons Law, and how it will be aligned with the Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.
7. Please provide an update on the progress of the draft Petroleum Law, and how it will align with Myanmar's obligations under the Extractive Industry Transparency Initiative.
8. I understand that all previous members of the Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC) have been replaced with new commissioners. Please provide information on the selection process. Please also provide information on plans to amend the MNHRC's enabling Law, and how it will be aligned with the Paris Principles.

Administration of justice

9. It is reported that there are 74 political prisoners currently serving sentences. What is obstructing their release? Please provide information on the steps being taken to bring about the release of all political prisoners.
10. Please provide information on the reported conviction of the following people, including the proceedings that were commenced against them, any trial that took place and whether they had legal representation:
 - (a) Thein Aung Myat (reportedly sentenced to two years in prison in Ayeyarwady Region under section 17(1) of the Unlawful Associations Act for publishing a calendar using terminology used by the Arakan Army)
 - (b) Kaung Myat Thu (reportedly sentenced to two years in prison in Ayeyarwady Region under section 17(1) of the Unlawful Associations Act for publishing a calendar using terminology used by the Arakan Army)
11. Please provide information, including the status of proceedings and whether the defendants have legal representation, about the following cases that are ongoing:

- (a) Nay Zar Tun (reportedly jailed and facing two charges for defamation in Yangon in relation to her campaigning for release of her brother, Aung Ko Htwe)
- (b) Swe Win (reportedly facing charges of defamation in Mandalay under section 66(d) of the Telecommunications Law)
- (c) Ye Ni (reportedly facing charges of defamation in Yangon under section 66(d) of the Telecommunications Law)
- (d) Aung Marm Oo (reportedly facing charges under the Unlawful Associations Act)
- (e) Aung Kyi Myint (reportedly jailed in solitary confinement and facing charges sections 114, 147, 332, 333 and 353 of the Penal Code)
- (f) Kyi Myin (reportedly facing charges in Tanintharyi Region under section 505(a) of the Penal Code)
- (g) Nay Myo Zin (reportedly facing charges in Tanintharyi Region under section 505(a) of the Penal Code)
- (h) Saw Wai (reportedly facing charges in Tanintharyi Region under section 505(a) of the Penal Code)

General election and democratic space

12. Please provide information on plans to ensure that polling for the 2020 General Election will be carried out in all areas and that all communities will be eligible to participate and exercise their right to vote.
13. What steps are being taken to address the spread of hate speech on social media, and what specific measures will be taken in the run up to the 2020 General Election?

Natural resources

14. What steps are being taken to strengthen transparent implementation, monitoring and enforcement of the Environmental Impact Assessment Procedure?
15. What steps are being taken to establish a fair and effective system of revenue sharing from natural resource extraction?
16. Please provide information on plans to ensure that companies will disclose details of their beneficial owners and that “Politically Exposed Persons” will be transparent about their ownership in natural extraction companies in line with Myanmar’s obligations under the Extractive Industry Transparency Initiative.

Business and human rights

17. I understand that the government is planning to develop a digital identification database alongside digital identification cards. I also understand that the government is planning to require biometric registration of mobile subscriber identification module (SIM) cards. Please provide information on the progress of these plans, and details of what data will be collected, from whom, from where and how it will be used and stored. Please also provide details of plans to develop legislation to regulate data protection.
18. What measures are being taken to empower workers and improve conditions in all sectors including garment factories and the fishing industry?

Armed conflict and peace process

19. Please provide information on reports civilian casualties of the conflict between the Tatmadaw and the Arakan Army in northern and central Rakhine and southern Chin States.
20. Please provide information as why the suspension of mobile internet services was reinstated in Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung, Myebon in Rakhine and Paletwa in Chin, bringing the number of affected townships to nine. Please provide information about when the suspension of mobile internet services in all the nine townships will be lifted, and

details of any interim arrangements being implemented to ensure the rights to information and freedom of expression. Please explain how communities affected by armed conflict are adequately supported and protected under the suspension.

21. Access to humanitarian assistance remains severely restricted in northern and central Rakhine and southern Chin States, as does freedom of movement. Please provide detailed information as to what is being done to ensure access of humanitarian access to civilians affected by the conflict, and to ensure safe passage to those displaced and / or in need of healthcare and assistance.

22. I have received reports that Rohingya in Rakhine State continue to face violence, intimidation and harassment. Please provide information about this, any investigations undertaken and perpetrators held to account.

23. I have received reports that village administrators in Rakhine State are being targeted by the Tatmadaw and subjected to violence, intimidation and harassment. Please provide information about this, any investigations undertaken and perpetrators held to account.

24. I understand that charges have been filed against an approximate 500 people in Rakhine State over alleged links to the Arakan Army. Please provide information, including whether the defendants have access to legal representation

25. How has the expiration of the Tatmadaw's unilateral ceasefire covering Shan and Kachin States affect the peace process?

26. Please provide information about civilian casualties of the conflict between the Tatmadaw and ethnic armed organizations in northern Shan State.

27. I understand that there has been recent fighting between the Tatmadaw and the Karen National Liberation Army. Please provide information on reports of civilians affected. How will this affect the peace process?

28. I understand that there has been recent fighting between the Tatmadaw and the Mon National Liberation Army. Please provide information on reports of civilians affected. How will this affect the peace process?

29. Is the Tatmadaw continuing to lay landmines? Please provide details of where, the precautions that are taken to minimize harm to civilians and any demining programs in place.

Refugees and internally displaced persons (IDPs)

30. Please provide details on measures to support the voluntary, safe, dignified, and sustainable return of refugees currently living in Thailand.

31. Please provide details on the reported voluntary repatriation of Rohingya refugees from Bangladesh. How many have returned; their place of origin; and where they are currently residing.

32. Please provide information on the progress of implementation of the "National Strategy for the closure of the IDP camps in Myanmar."

33. Please provide information on what measures are being taken to protect the rights of the growing number of IDPs in Rakhine State, now reported to have reached 100,000. Given there are restrictions on humanitarian access, how are you ensuring that they have the assistance that they require?

34. Please provide information on the recent reports of the Tatmadaw destroying IDP camp in Myebon Township, Rakhine State.

Accountability

35. Please provide a copy of the full version of the report of the Independent Commission of Enquiry. How was independence and impartiality of the Commission secured? Do you plan to implement all the recommendations that were made? If so, please provide information on how you plan to do this and the timeline.

36. Please provide information about how you plan to comply with the provisional measures indicated by the International Court of Justice on 23 January 2020.

Annex III

Militia and Drug Addiction in Conflict-Affected Areas

I. Introduction

This briefing paper, annexed to the report of the Special Rapporteur, provides a brief overview of the situation of militia and drug addiction in Myanmar, which is impacting on human rights. The aim of the briefing paper, which is drawn from open source material,¹ is to raise awareness of and encourage further research into the issues.

For decades there has been a range of armed actors involved in Myanmar's internal armed conflicts. Alongside the Myanmar military, or Tatmadaw, and ethnic armed organisations (EAOs), there are numerous smaller armed groups known collectively as militia. The majority of militia are allied with the Tatmadaw and operate under its command.²

Currently, Myanmar may be the second largest producer of heroin in the world and the largest producer of methamphetamine.³ EAOs are often reported to be highly involved in the narcotic industry in Myanmar, however analysts suggest that militia allied to the Tatmadaw are among the key players.⁴

The scale of the industry and its connection to Myanmar's conflicts has many serious implications for the situation of human rights in Myanmar. One of these is the serious harm it is inflicting on the civilian population by having resulted in high rates of drug addiction across the country, that is particularly acute in conflict-affected areas.

II. Militia and the narcotic industry

A. Background

For decades the Tatmadaw has been engaged in armed conflicts in Myanmar's border areas against dozens of EAOs from amongst the Karen, Karenni, Shan, Mon, Kachin, Chin and Rakhine and other ethnic groups. The peace process launched by the Government in 2011 is at a standstill, and recent years have seen intense fighting in Myanmar.

Alongside the Tatmadaw and the EAOs, there are many smaller conflict actors known collectively as militia. The majority are pro-Tatmadaw, operate under its command to varying degrees, and are part of its defence strategy; although they differ significantly in type, size and precise nature of their relationship with the Tatmadaw (for example, some may be under its direct command, some may even travel with Tatmadaw battalions, whereas some carry out security operations in designated areas).⁵ The Tatmadaw has long incorporated militia into its command structure. However, despite the role they play for the Tatmadaw, they are expected to be self-funding. Under General Ne Win, the Government did not provide militia allied to the Tatmadaw with funding and instead authorized them to

¹ With supporting research by Htike Htike for dissertation titled "The Politics of Illicit Drug Trade in Conflict: A comparative study of the contemporary Kachin War and Rohingya Crisis in Myanmar (Burma)" MSc Politics of Conflicts, Rights and Justice Department of Politics and International Studies, SOAS, University of London, 2019.

² For more information see "Militias in Myanmar" by John Buchanan for the Asia Foundation, 2016.

³ For more information see "Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact" by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2019 and ICG, 2019.

⁴ For more information see "Fire and Ice: Conflict and Drugs in Myanmar's Shan State" by the International Crisis Group (ICG), 2019.

⁵ Buchanan, 2016.

control the administration of the areas in which they operated and engage in profit-generating activities – including the narcotic industry.⁶

The Tatmadaw-drafted 2008 Constitution states that “all the armed forces in the Union shall be under the command of the Defence service”.⁷ Accordingly, from 2009 to 2010, the Tatmadaw attempted to transform EAOs into pro-government militia, namely People’s Militia Forces (PMF) and Border Guard Forces (BGF). This contributed to the breakdown of several long-standing bilateral ceasefire agreements.⁸ However, several pro-government militias, EAOs with bilateral ceasefire agreements with the Tatmadaw and anti-government EAOs in Myanmar’s conflict areas did become PMFs and BGFs. In a continuation of the policy initiated under General Ne Win, rather than being provided with funds from the military budget, BGFs and PMFs are allowed to control territory and conduct their own profit-generating activities within it, while they perform security duties and if necessary fight alongside the Tatmadaw.⁹

There also remains many militias that are not PMF or BGF but are allied to the Tatmadaw, operate under its command and supervision, and are authorised to conduct their own profit-generating activities within designated territory.¹⁰

B. Conflict areas

Shan State has long been a global epicentre of illicit drug production. It was the primary global source of opium and heroin for decades and is now the centre of a massive regional methamphetamine production and trafficking industry, linked to transnational criminal organisations.¹¹ By 2019, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) estimated that the Southeast Asian methamphetamine market could value up to USD \$61.4 billion annually, and the heroin market around USD \$10.3 billion.¹² Sites of drug production on an industrial scale need to remain hidden and inaccessible to law enforcement or others who may scrutinise them. With many areas under the control of Tatmadaw allied militia and BGF, and large enclaves under the full territorial control of EAOs that have bilateral ceasefire agreements with the Tatmadaw, much of Shan State provides the necessary environment for mass synthetic drug production and trafficking.¹³

After the 17-year long ceasefire between the Kachin Independence Army (KIA) and the Tatmadaw broke down in 2011, some armed groups that had splintered off from the KIA transformed into BGF and PMF. For example, the Kachin Defence Army became a PMF and the New Democratic Army – Kachin became several BGF units.¹⁴ Civil society groups report that the increased number of PMF and BGF has corresponded with a rise in the production, distribution and sale of narcotics in Kachin State.¹⁵

Since 2008 as many as fifteen separate BGF battalions have been established in Kayah and Kayin States.¹⁶ Again, civil society report this period as having corresponded with an increase in production, distribution and sale of narcotics in those States. Tatmadaw allied militia, such as the Democratic Karen Buddhist Army also hold territory and are reported to be engaged in methamphetamine production, allegedly with the support of the United Wa State Army.¹⁷

⁶ For more information see “A Return to War: Militarized Conflicts in Northern Shan State” by the Institute for Security and Development Policy, 2018.

⁷ Constitution section 338.

⁸ Buchanan, 2016, “Silent Offensive How Burma Army strategies are fuelling the Kachin drug crisis” by the Kachin Women’s Association Thailand (KWAT), 2014.

⁹ Buchanan, 2016.

¹⁰ Buchanan, 2016.

¹¹ ICG, 2019.

¹² UNODC, 2019.

¹³ ICG, 2019.

¹⁴ KWAT, 2014.

¹⁵ KWAT, 2014.

¹⁶ Buchanan, 2016.

¹⁷ Buchanan, 2016.

In Rakhine State, the Border Guard Police (BGP) operates in addition to PMFs. The BGP is under the command of the Myanmar Police Force, which is controlled by the Tatmadaw-run Ministry of Home Affairs. BGP forces control regional checkpoints and other parts of the administration in Rakhine State. Since 2012, central and northern Rakhine State has become heavily militarised. Following the 2016 and 2017 security operations against the Rohingya in northern Rakhine, and in the context of the Tatmadaw's current serious armed conflict with the Arakan Army, people and the transport of goods have been subject to curfews and movement restrictions. Over this same period, seizures of narcotics in Rakhine State have increased. By 2018, Rakhine accounted for the largest portion of methamphetamine pill seizures besides Shan¹⁸ and is reported to be along a major trafficking route for methamphetamine going into South Asia.

III. Drug addiction

A. Trends in use

From the 1950s to the 1990s heroin was the predominant drug produced in Myanmar, and has been widely available and used in parts of Myanmar for decades. In the 1990s heroin production began to decline but was replaced by the production of methamphetamines.¹⁹ These typically take the form of “yaba” – tablets containing a mixture of low-purity methamphetamine and caffeine. Since the early 2000s, yaba use has surged in Myanmar, corresponding with increased production of the drug. Yaba has become steadily cheaper and more readily available, despite significant increases in large and small seizures, and arrests of users and small-time dealers.²⁰

More recently there has been a sharp rise in the production of crystal methamphetamine,²¹ a high-purity crystalline form of methamphetamine, also known as “ice”. Crystal methamphetamine is reportedly becoming increasingly popular in the southeast Asia region, and while retail supply and demand in Myanmar at the present time is limited, it may increase. This has public health implications as crystal methamphetamine is more potent than yaba, and it is suitable for injection.²²

B. Conflict areas

Drug addiction affects people around Myanmar, however a confluence of factors in ethnic states affected by conflict can fuel rates of drug use and addiction and exacerbate the negative impacts for individuals and communities. The presence of Tatmadaw, militia, BGF, and EAOs, all of whom may be involved in the production, sale and distribution of narcotics, combined with weak rule of law, results in drugs being readily available.

Marginalisation, discrimination and economic deprivation faced by ethnic communities have contributed to conditions conducive to high rates of drug use and addiction. These issues are acute in internally displaced persons camps in Myanmar and refugee camps on Myanmar's borders with Thailand and Bangladesh. A joint report by Mon, Kachin, Karen, Karenni, Shan, Pa-o and Ta-ang civil society groups on the impact of protracted displacement amongst ethnic communities due to armed conflict described how drug addiction is common in many displacement sites. This is due to easy availability of drugs and fuelled by the hopelessness and frustrations of displacement. These civil society groups report that in recent years the reduction of aid in eastern Myanmar and to refugee

¹⁸ UNODC, 2019.

¹⁹ For more information see “Addressing drug problems in Myanmar: 5 key interventions that can make a difference” Drug Policy Advocacy Group Myanmar, 2017.

²⁰ For more information see “Methamphetamine use in Myanmar, Thailand and Southern China: assessing practices, reducing harms” by Renaud Cachia and Thura Myint Lwin for the Transnational Institute, 2019.

²¹ ICG, 2019.

²² Cachia and Thura Myint Lwin, 2019.

camps on the Thai border coupled with uncertainty about the future and a lack of options seen by people in these areas have led to higher rates of drug dependency.²³

Humanitarian access restrictions by the Myanmar Government on the United Nations and international organisations to parts of Kachin, northern Shan and Rakhine State have undermined services, including health services. This makes it more difficult for those suffering from drug addiction to receive adequate treatment and support. Local initiatives aimed at breaking the cycle of addiction and treating addicts have been established in some areas, but they are under resourced, and in some cases have reportedly been forced to stop their activities after receiving threats.²⁴

A local actor involved in drug rehabilitation estimated that in Kutkai, northern Shan, every household has a drug addict.²⁵ Drivers on the Muse-Mandalay road, the main trading route to China, reportedly use both heroin and yaba.²⁶ At some petrol stations in Muse, syringes and distilled water are reportedly given instead of small change.²⁷ The Lahu National Development Organisation has estimated that in about 70 per cent of households in the villages surveyed there are young men who are addicted to drugs and that this is a threefold increase from 2008. Lahu villagers say that the reason for the increase in addiction is the greater availability of drugs, and that militia groups actively promote local drugs sales. They report that militia members have stopped local addicts from entering drug rehabilitation programs, because they fear a loss of income.²⁸

In Kachin State, civil society report that drugs are flooding into Kachin towns and mining sites, and along trading routes. Levels of drug addiction have been described by local actors as having reached epidemic proportions.²⁹ In the jade mines of Hpakant, which are tightly controlled by armed actors including the Tatmadaw and Tatmadaw allied militia, drug use takes place openly and permeates every aspect of life. Informal mine workers report being paid in heroin and methamphetamine. Local residents have estimated that 90 per cent of workers in the Hpakant jade mines are drug users.³⁰

Myitkyina, the capital of Kachin State, is reported to have one of the highest concentrations of drug addicts in the world.³¹ The Kachin Baptist Convention, which runs a drug rehabilitation programme, claims that approximately 80 per cent of ethnic Kachin youth are drug addicts. Health and social workers report that about a third of students at Myitkyina and Bhamo universities are injecting drug users.³² Another local actor estimates that almost every Kachin family has been affected by the drug problem. According to one drug user, “You can get drugs everywhere in Myitkyina city. I was arrested many times. I have 4 older brothers, but they all died because of drugs.”³³ People from Kachin communities reportedly blame the Tatmadaw for targeting them with illicit drugs and have accused the Tatmadaw of using drugs as a weapon against their communities, and suspect drugs are promoted to Kachin youth to distract them from political activism.³⁴

In Kayin and Kayah States local people have been reporting their concerns over rising drug use in recent years. They report that yaba in particular is being widely used by

²³ For more information see “The Is No One Who Does Not Miss Home: Report on Protracted Displacement

Due to Armed Conflict in Burma/Myanmar” by fifteen ethnic community-based organizations and locally-based civil society organizations, coordinated by Progressive Voice, 2019.

²⁴ For more information see “Drug crisis ravages Myanmar’s Shan State” Agence France-Presse, 2019.

²⁵ AFP, 2019.

²⁶ KWAT, 2014.

²⁷ KWAT, 2014.

²⁸ For more information see “Naypyidaw’s drug addiction: The Burma Army’s strategic use of the drug trade in the Golden Triangle and its impact on the Lahu” by The Lahu National Development Organisation, 2016.

²⁹ KWAT, 2014.

³⁰ For more information see “Battling for blood jade” by Hannah Beech for Time, 2016

³¹ For more information see “Drug addiction lurks in Myanmar conflict’s shadow” by Gemunu Amarasinghe for the Associated Press, 2013.

³² KWAT, 2014.

³³ KWAT, 2014.

³⁴ KWAT, 2014.

many children, students and men, as it is not difficult to buy. In Hlaingbwe Township in Hpa-an District, Kayin State, high school students reportedly know how to use these drugs and are already addicted to them,³⁵ and there are four BGF battalions present in Hlaingbwe Township.³⁶ According to a community member from southeast Kayin State, “The methamphetamine drugs came from the organizations [armed groups], then [they] spread it to the civilians.”³⁷ A mobile health worker described their sense of helplessness in the face of rising drug addiction, “We cannot solve the problem. Only the leaders of the armed groups can set up the rules and prohibit people from using drugs. It really affects our development. The young people do not have interest in the other things [education, etc.] anymore. It is like people stole and destroyed our future.”³⁸

It is challenging to obtain information on rates of drug use and addiction in Rakhine State. However, according to testimony of Rohingya living in displacement camps in Sittwe since 2012, a yaba pill costs only 200–300 Kyats (which is about 0.13 to 0.20 USD) and this is cheaper than food. Drug dealers reportedly distributed free samples when the camps were set up by the Tatmadaw and State authorities in 2012. Since then, yaba is widely available in the camps, and many Rohingya are addicted.

C. Government response

The Tatmadaw also has significant influence over the central Government response to illicit drugs, as the Central Committee for Drug Abuse Control is part of the Ministry of Home Affairs.

The Narcotic Drugs Act and Psychotropic Substances Law 1993 has for years been used to target opium farmers, small-scale dealers and drug users, rather than those responsible for large-scale drug production and supply. In 2018, Myanmar released its National Drug Control Policy, which was developed by the Central Committee for Drug Abuse Control after extensive consultation with UNODC. The Policy focuses on harm reduction, prioritising public health approaches for users and refocusing law enforcement and criminal justice efforts toward combating organised crime and corruption. However, amendments to the Narcotic Drugs Act and Psychotropic Substances Law 1993 were enacted shortly after and retain a focus on criminal penalties for those in possession of any quantity of drugs.³⁹

The National Drug Control Policy states that in 2016, 48% of Myanmar’s 60,000–80,000 prisoners were detained for drug-related offences, with the percentage of drug-related offenders as high as 70–80 per cent in some prisons (such as in Myitkyina, Kachin State, and Lashio, Shan State).⁴⁰ Imprisoning drug users exacerbates issues of drug addiction, as drug use rates in prison are high, and once imprisoned users are unable to access rehabilitation services. At the same time, the militia running and profiting from the illicit drug industry operate with impunity.

D. Harm caused

Drug addiction can inflict severe physical, psychological, emotional, financial and other harm on an individual, which has consequential negative effects for the family, and also society. The mental and physical harm caused by high and/or prolonged use of methamphetamine can include insomnia, anxiety, palpitations, loss of teeth, confusion, irrational behaviour, hallucinations and paranoid thoughts, bleeding cough, loss of memory,

³⁵ Interview KHRG #15-83-A2-I1, Karen Human Rights Group (KHRG), 2015.

³⁶ Buchanan, 2016.

³⁷ For more information see “Growing drug use and its consequences in Doooplaya and Hpa an districts” KHRG, 2015.

³⁸ Interview KHRG #14-63-A3-I1, KHRG, 2014.

³⁹ ICG, 2019.

⁴⁰ The National Drug Control Policy, developed by the Myanmar Police Force (MPF) Central Committee for Drug Abuse Control (CCDAC), the Ministry of Home Affairs, with support from the UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific and Country Office for Myanmar.

fatigue and exhaustion, impatience, anger and increased aggressiveness. There is also an increased risk of tuberculosis transmission due to sharing smoking equipment.⁴¹ Heroin is more commonly injected. The mental and physical harm caused by high and/or prolonged use of heroin can include damage to veins and arteries that can lead to gangrene and to infections, severe depression, insomnia, anxiety, fatigue, intense craving and death by overdose or vomiting.⁴² Sharing needles and syringes carries a high risk of HIV, hepatitis B or hepatitis C transmission. Nearly 1 in 3 injecting drug users in Myanmar is living with HIV, which is 48 times higher than the prevalence in the general population.⁴³

The impacts of drug addiction are also felt by families of drug addicts. Although increasing numbers of women, particularly in trading sites for goods transported to China, are reportedly taking drugs, most users in Myanmar are reportedly male. Gender inequality in Myanmar society heightens problems, as already bearing the burden of all domestic work, women struggle when husbands, sons and fathers not only stop providing income to the family but sell off family possessions and steal to feed their drug habit. Women are also expected to care for drug users when they fall ill.⁴⁴

IV. Conclusion

The high rate of drug addiction in Myanmar is affecting fundamental rights of many individuals, particularly within ethnic communities affected by conflict. This includes the rights to an adequate standard of living, work, just and favourable conditions of work, the highest attainable standard of physical and mental health, education, take part in cultural life, life, freedom from cruel, inhuman or degrading treatment, liberty and security of person, and privacy and family life.

More research into this area, and in particular the human rights implications, is needed. The Government must do more and implement the National Drug Control Policy, focusing on tackling organised crime and corruption. At the same time community level interventions should be centred on education and harm reduction instead of punitive criminal justice measures, with the assistance of international agencies. Finally, there must be accountability for the Tatmadaw, and militias involved in drug production and sales.

⁴¹ Cachia and Thura Myint Lwin, 2019.

⁴² National Institute on Drug Abuse <https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/heroin>.

⁴³ Drug Policy Advocacy Group Myanmar 2017.

⁴⁴ KWAT, 2014.